

Política posicional y mundo hipercomplejo: por unas ciencias sociales más reorientadoras y relevantes

Positional Politics and the Hypercomplex World: For Social Sciences That Reorient and Matter

Fredy Aldo Macedo Huamán

Universidad Nacional Rosario
Castellanos (México)

fredy.macedo@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.70467/acs.v2n2.1>

Recibido: No aplica

Aceptado: No aplica

Sección: Presentación editorial

Cómo citar: Macedo H., F.A. (2026). Política posicional y mundo hipercomplejo: por unas ciencias sociales más reorientadoras y relevantes. *Alternativas en Ciencias Sociales*, 2(2), 7-19.

Abstract. The text proposes positional politics as a framework for social sciences aimed at intervening in a hypercomplex world such as the one we live in. It draws on the dual reality of our times: the destabilization of the known and the emergence of creative options for reconfiguring the social order. It advocates for understanding the social sciences as a transdisciplinary field and a public actor—not a partisan activist—that combines diagnosis, innovation, and co-creation with non-academic actors, evaluating impacts and adjusting strategies. In addition to presenting the issue's contents, it identifies six priority areas: economic, environmental, health, educational, governance, and everyday life, and highlights their interrelationships (for example, job insecurity and health vulnerability). It warns against technocratic capture by certain corporate-governmental elites and calls for critical scrutiny of the technological design, funding, and deployment currently underway. It advocates for conceptual provisionality, based on a refined exercise in foresight, as a methodological virtue and recalls diagnostic precedents (Bell, Beck, Castells). The text concludes that positional politics requires taking an informed and open-to-dialogue stance, positioning the analyst as a co-creator of public alternatives.

Keywords: social sciences; political concepts; contemporary debate; future stages; research trends.

Resumen. El texto propone la *política posicional* como marco para unas ciencias sociales orientadas a intervenir en un mundo hipercomplejo como el que se vive. Parte de la doble realidad contemporánea: la desestabilización de lo conocido y la emergencia de opciones creativas para reconfigurar el orden social. Aboga por entender a las ciencias sociales como un campo transdisciplinar y actor público —no activista partidario— que combina diagnóstico, innovación y co-creación con actores no académicos, evaluando impactos y ajustando estrategias. Además de presentar los contenidos del número, señala seis registros prioritarios: económico, ambiental, sanitario, educativo, de gobernanza y de la vida cotidiana, y subraya sus interrelaciones (por ejemplo, precariedad laboral-vulnerabilidad sanitaria). Advierte sobre la captura tecnocrática por ciertas élites corporativo-gubernamentales y reclama una vigilancia crítica sobre ese diseño, financiamiento y despliegue tecnológico puestos en marcha. Defiende la provisionalidad conceptual, desde un ejercicio de prospectiva fina, como virtud metodológica y recuerda antecedentes diagnósticos (Bell, Beck, Castells). El texto concluye que la política posicional exige tomar una postura informada y dialogable, situando al analista como co-creador de alternativas públicas.

Palabras clave: ciencias sociales; conceptos políticos; debate contemporáneo; escenarios futuros; tendencias investigativas.

El tiempo de ruptura e incertidumbre que predomina hoy, obliga a reconocer dos realidades simultáneas. Por un lado, lo conocido se desestabiliza o al menos se expone a un examen más detenido y discernidor; por otro, ese mismo desajuste invita al empuje de una energía creativa, orientada a reconfigurar el orden sociopolítico. Las ciencias sociales son impulsadas a situarse en ese doble movimiento, desde el ritmo y sentido que pautan esas nuevas condiciones, sin abandonar lo bien aprendido y ejercido por su parte: diagnosticar el quiebre y participar más activamente en la construcción de alternativas. No se trata solo de interpretar el mundo como se hizo convencionalmente, sino de contribuir a moldear el que viene, atendiendo sus claves y tendencias, y asumiendo que los puntos de inflexión son también oportunidades para reorientar trayectorias colectivas.

Para ello, las ciencias sociales deben entenderse como un campo transdisciplinar que trasciende la mera conversación entre disciplinas y reconoce, desde un perfil articulador, su vocación humanista y proyección pública. No basta con generar conocimiento académico: es necesaria una vía que catalice lo cívico y lo público, articulando capacidades, agentes y repertorios con actores no académicos y con la ciudadanía, para defender valores humanos fundamentales y orientar procesos de cambio

constructivo, de manera abierta, crítica y reflexiva. Se trata de reconocer un papel que convoca lo que ya se hace habitualmente en la academia, sin limitarse a ello; junto a las dimensiones que compartimos con la ciudadanía ante desafíos comunes como los de hoy.

Esta intervención, sin embargo, no debe confundirse con activismo partidario ni con propaganda ideológica: se contrapone, de hecho, a sus premisas y fines. Se trata, más bien, de asumir una responsabilidad pública que complemente la investigación y la docencia habituales, combinando tres elementos centrales: rescatar lo valioso de nuestras trayectorias históricas, incorporar innovaciones con potencial constructivo, y actuar como co-creadores del futuro junto a los actores protagónicos —no como observadores pasivos, sino como agentes relevantes—. Esto exige, además: generar alianzas sostenibles con organizaciones civiles, comunidades y actores locales que traduzcan el análisis en acciones concretas; explicar con transparencia los objetivos, límites y supuestos de las intervenciones; evaluar continuamente los impactos y ajustar las estrategias según los resultados y la retroalimentación ciudadana; y preparar profesionales capaces de trabajar en contextos complejos, con herramientas interdisciplinarias y sensibilidad ética.

Asumir este rol exige reconocer la vulnerabilidad de los entornos y la responsabilidad de quienes producen conocimiento. Las ciencias sociales deben contribuir a frenar dinámicas destructivas —la opresión, la desigualdad injusta, la manipulación cultural-política, la degradación ambiental— sin perder rigor analítico ni perspectiva en su valoración, y sin aferrarse, desde una vocación épica, a corregir procesos que escapen a su manejo y que responderían más bien a influjos fragmentarios, extremistas o mesiánicos (Escalante, 2024). Su legitimidad dependerá de la capacidad para combinar independencia crítica con compromiso público informado, situándose como actores —y no como sujetos o agentes pasivos— ante esas espirales regresivas u ofuscadoras que emergen, tocando nuestra piel, aunque no queramos verlas o reconocerlas.

Desde esa vena, al ser consultada sobre el papel de los filósofos en la sociedad, Agnes Heller respondió —algo que también, en cierto modo, es aplicable a los científicos sociales— lo siguiente:

¿Pueden los filósofos cambiar la sociedad en la que viven? ¿Se sigue escuchando su voz?

Marx dijo que los filósofos son los intérpretes del mundo y que solo los ciudadanos deben cambiarlo. Aunque es algo que me provoca ciertos problemas. Primero, los filósofos siempre han querido influir en la sociedad en la que vivían. Nunca se conformaron con explicarla. Pero

la pregunta es saber con qué medios y objetivos querían hacerlo. Y muchas veces han querido convencer a los líderes absolutistas para llevar a cabo esas transformaciones. Desde Platón y el tirano de Siracusa hasta Sartre con Fidel Castro o Kruschchev. Es el camino equivocado, nunca llegaron a persuadir al dictador de nada, solo mancharon su nombre. Pero hay otro tipo de pensadores que quieren participar en la vida pública, convencer a la sociedad, ofrecer un servicio, como Spinoza o Kant. Su filosofía era: utilízalo o déjalo de acuerdo con tus necesidades y tus intereses, son solo recomendaciones. Es lo que hizo por ejemplo John Locke, que influyó en los padres fundadores de la Constitución estadounidense. Nuestro deber es escribir libros, dar charlas, servir al público. (en Altares, 2017) (La negrita corresponde al original)

En fin, la pregunta sobre qué papel deben jugar las ciencias sociales en el mundo actual abre caminos prácticos y modestos, no recetas grandilocuentes. Si se asumen como espacios de diálogo, co-creación y responsabilidad pública, podrán ayudar a orientar las transiciones sociales hacia resultados más constructivos y deseables. No se trata de ofrecer respuestas definitivas, sino de abrir cauces de reflexión y acción que permitan encarar, con mayor encuadre y sentido colectivo, los desafíos de un mundo hipercomplejo en constante transformación.

Lo esbozado hasta aquí traza apenas un marco panorámico: una manera de nombrar el lugar y el papel que, a nuestro juicio, corresponde a las ciencias sociales ante un presente hipercomplejo; atravesado por embates, reacomodos y concentraciones de poder, en parte inéditas junto a readaptaciones en torno a ello (Da Empoli, 2025; Kaplan, 2025). Queda deliberadamente pendiente su aterrizaje estratégico —la pregunta más operativa sobre cómo traducir ese encuadre en una agenda investigativa e intelectual concreta—, que retomaremos más adelante, a título de ruta sugerible para autores e interesados en las ciencias sociales.

Para recapitular lo escrito hasta aquí, ese aterrizaje estratégico tiene ya denominación desde lo conceptual en una categoría, que ofrezco aquí como adelanto y aporte provisional: *política posicional*. Un abordaje más detenido y amplio al respecto, es algo que estoy desarrollando en otro trabajo, aún inédito, como una herramienta analítica de uso directo: esta consiste en un procedimiento para diagnosticar con precisión lo que en nuestra época colapsa, se diluye sin ruido o sobrevive de forma anacrónica, al tiempo que exige sopesar lo valioso en lo andado históricamente, y para trazar, a partir de ese diagnóstico, un horizonte concreto y asumible por el que valga la pena actuar. No es una categoría contemplativa ni un ejercicio de estilo intelectual; se propone ser una arquitectura de juicio que exige,

de quien la ejerce, tomar postura y sostenerla con responsabilidad y criterio —ni es el confort de la denuncia sin propuesta, ni la comodidad de la neutralidad que aplaza toda decisión—. Y exige, además, hacerlo en sintonía con la atmósfera afectiva de quienes comparten esta experiencia histórica, porque un diagnóstico que no logra interpelar a sus destinatarios pierde, de hecho, buena parte de su capacidad de movilizar algo.

Esta es la vía que reivindicamos para unas ciencias sociales que no se conforman con interpretar el mundo como acto hermético y aislado: formarse un juicio propio no es un gesto identitario, sino una herramienta disponible para cualquier actor dispuesto a asumir el riesgo de pronunciarse y entrar, a partir de ello, en una deliberación abierta y discernidora, pues su autoridad no depende de dónde se habla sino de la calidad y autonomía con que se ejerce. Ese es el papel que corresponde hoy al intelectual y al científico social: no persuadir al poder, como advertía Agnes Heller, ni imponer certezas, sino ofrecer, con la misma responsabilidad pública con que un Locke planteó sus ideas a quienes debían decidir, un encuadre utilizable —una posición trazada con lucidez, lista para discutirse, corregirse y orientar la acción colectiva hacia salidas más constructivas que las que hoy tenemos a disposición.

Antes de llegar más a fondo a ese punto, corresponde detenernos en los contenidos que integran este número —con el cual cumplimos dos años como revista académica—, no como mero inventario, sino como una primera puesta a prueba, parcial y heterogénea, de las tensiones ya señaladas entre diagnóstico, intervención y responsabilidad pública del conocimiento social. Los textos que lo componen, más las dos reseñas que los acompañan, provenientes de registros distintos —la historia cultural, la economía política del riesgo climático, la economía solidaria y la teoría democrática, junto a la educación y las humanidades—, permiten observar, cada uno a su modo, cómo se piensa hoy la relación entre las ciencias sociales y el mundo que las convoca.

Abre la sección de Artículos el trabajo de Carlos Reyes Álvarez, “El Carnaval Cajamarquino: historia y procesos de transformación cultural”, que examina la trayectoria del carnaval de Cajamarca a lo largo del siglo XX como una construcción histórica viva, atravesada por relaciones de poder y disputas simbólicas, antes que como una tradición fija o folclorizada. Desde la historia cultural, en diálogo con la historia social y la antropología simbólica, el autor identifica tres momentos de inflexión: la institucionalización de la festividad durante el gobierno de Leguía; la incorporación de elementos rurales —coplas, unshas, música andina— de la mano de las migraciones internas de mediados de siglo XX, que hibridizó lo urbano y lo campesino; y la resignificación de lo popular impulsada por

las políticas culturales del velasquismo. El artículo tiene el mérito de sostener, con un aparato documental denso, una tesis clara: que un ritual festivo puede leerse como “dispositivo analizador” de los cambios sociales, políticos y económicos de una región. Su límite es también el reverso de esa fortaleza: al concentrarse en el caso cajamarquino sin abrir un diálogo comparativo con otras regiones andinas o latinoamericanas, el texto deja en suspenso la pregunta por el alcance de sus hallazgos, más allá del valor intrínseco —indiscutible— del caso reconstruido.

El artículo de América E. Hernández Veráztica, “Del umbral técnico al gasto inteligente: innovación financiera para la resiliencia climática”, se sitúa en el registro de la economía política de la gestión del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe. La autora examina por qué los ministerios de hacienda de la región permanecen atrapados en presupuestos reactivos, posteriores al desastre, en lugar de mecanismos proactivos basados en pronósticos, pese a la evidencia de retornos de entre 3:1 y 7:1 en acción anticipatoria. Identifica tres tipos de barrera (institucionales, financieras y de gobernanza) y, a partir de experiencias en México, Centroamérica, el Caribe y Brasil, propone Fideicomisos de Acción Anticipatoria precapitalizados, activados por umbrales técnicos y no por decisiones políticas. Es un texto sólido en su análisis comparado de instrumentos de financiamiento, con una propuesta de política pública claramente formulada. Cabe señalar, sin embargo, que despolitizar el disparador del gasto es en sí misma una decisión política, y merecería una reflexión más explícita: sustituir criterios políticos por umbrales técnicos no elimina la política de la ecuación, sino que la desplaza hacia el diseño y el control de esos mismos umbrales, un punto que la sociología y la ciencia política de la experticia han discutido con particular atención.

En la sección de Notas de investigación se incluye el trabajo de Dustin T. Gómez Rodríguez, “Circuitos cortos agroecológicos y economía solidaria en Colombia, Ecuador y Venezuela: estrategias para la soberanía alimentaria y la sostenibilidad territorial”. El autor realiza un ejercicio comparativo apoyado en el análisis documental de cuarenta y siete fuentes secundarias y doce experiencias organizativas, para identificar convergencias y divergencias entre circuitos cortos de comercialización agroecológica en esos tres países. Sus resultados muestran patrones comunes —reducción de la intermediación, gobernanza solidaria, resiliencia territorial— junto a diferencias asociadas a los niveles de institucionalización y de apoyo estatal. El valor del texto reside en su escala comparativa: pocos trabajos ponen a dialogar contextos político-económicos tan distintos como los de Colombia, Ecuador y, sobre todo, Venezuela, cuya crisis estructural añade una capa de complejidad rara vez explorada. Su límite, propio del formato de nota de investigación y de una

base empírica mediada por fuentes secundarias más que por trabajo de campo directo, deja pendiente hasta dónde pueden asumirse como asuntos plenamente asentados estas experiencias, postulando solo su carácter deseable; lo cual implicaría ahondar en sus condiciones de escalabilidad y en las capacidades estatales diferenciadas que, según el propio artículo, explican buena parte de sus divergencias.

Jesús Silva-Herzog ofrece un ensayo que reivindica la importancia del presente bajo el prisma de su densidad, como condición de la deliberación democrática, y para ello plantea un itinerario que va desde el tiempo político según San Agustín y Maquiavelo hasta los diagnósticos contemporáneos sobre la aceleración social. El texto destaca por la claridad con que pone en relación tradiciones teóricas diversas —Wolin, Linz, Rosa, Van Middelaar, entre otros— y por insistir en que la democracia requiere ritmos, intervalos y pausas que hagan posible deliberar, evaluar y exigir rendición de cuentas; en ese marco, la defensa de la pausa adquiere notable fuerza conceptual y normativa. Queda abierta, sin embargo, la tarea de precisar qué prácticas o mecanismos permitirían contener la “tiranía del instante” en los contextos políticos contemporáneos. Silva-Herzog acierta al recuperar la dimensión temporal de la política; su argumento ofrece, además, un punto de partida fértil para explorar cómo esa sensibilidad podría traducirse en propuestas institucionales capaces de proteger la deliberación frente a la velocidad mediática y la urgencia tecno-política.

La reseña de Silvia Aguilar Martínez combina una síntesis informada con una valoración crítica equilibrada de la obra coordinada por Bisquerra, Canales y Milicic sobre educación emocional. Su lectura destaca la dimensión práctica del libro, en particular su insistencia en integrar la educación emocional en las políticas educativas y en la formación docente, así como la articulación entre conceptos —educación emocional, inteligencia emocional, competencia emocional— y técnicas pedagógicas aplicables al aula. Subraya, además, la necesidad de una formación docente en tres fases —sensibilización, formación y práctica—, a partir de lo cual sería provechoso considerar con mayor cuidado las condiciones institucionales y sociales que facilitan o limitan esa incorporación en sistemas educativos marcados por la desigualdad.

Fredy Aldo Macedo Huamán cierra el número con una reseña reflexiva sobre un libro de Katherine Southwood relativo a lo cívico desde las humanidades; combinando una lectura atenta con un examen conceptual de sus alcances. Destaca el diagnóstico sobre la mercantilización de la universidad y la defensa de las humanidades como espacios de formación de la empatía, la imaginación y la compasión cívica, y propone líneas de diálogo que enriquecen la recepción de la obra: situar el argumento en su

contexto de enunciación, distinguir entre diversos modelos de humanidades, y examinar con mayor precisión la relación entre autonomía intelectual y demandas de utilidad pública —observaciones que no cuestionan el valor del libro, sino que precisan las condiciones bajo las cuales las humanidades pueden contribuir a la civilidad política.

Lo hasta aquí recorrido —el encuadre panorámico inicial y el recuento de los contenidos de este número— no agota, sin embargo, la tarea propuesta. Falta un movimiento adicional, acaso el más arriesgado de esta presentación: proyectar, siquiera en sus trazos generales, un dimensionamiento prospectivo de lo que las ciencias sociales son y, sobre todo, de lo que podrían y deberían ser ante el mundo que se vive y el que se avecina. No se trata de inventariar con pretensión de exhaustividad ese horizonte —tarea que excede el propósito de una presentación editorial—, sino de enunciarlo, de nombrarlo en sus coordenadas más visibles, dejando para otro momento su desglose pormenorizado.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que las ciencias sociales se ven forzadas a nombrar objetos emergentes bajo condiciones de incertidumbre conceptual: Daniel Bell acuñó la noción de *sociedad posindustrial* cuando el desplazamiento del trabajo fabril apenas se insinuaba; Ulrich Beck propuso la de *sociedad del riesgo* para nombrar una modernidad que producía, junto a su progreso técnico, peligros sistémicos difíciles de circunscribir; y Manuel Castells describió la *sociedad red* antes de que la infraestructura digital alcanzara su ubicuidad actual. En los tres casos, el diagnóstico se formuló en caliente, con las precisiones aún provisionales, propias de quien nombra un proceso aún no revelado del todo. Ese antecedente ofrece un referente metodológico: la provisionalidad conceptual no ha impedido que esos diagnósticos tempranos orientaran con eficacia buena parte de la investigación social posterior.

Conviene admitir, además, que los contornos sustantivos de ese horizonte no están todavía del todo asentados. Nombrar un objeto de estudio emergente —la gobernanza algorítmica, la salud computacional, la educación personalizada por sistemas cognitivos, entre otros en ciernes— no equivale a haberlo comprendido en su especificidad, ni a disponer ya de un aparato conceptual suficientemente decantado. Reconocer esa provisionalidad no es, a nuestro juicio, una debilidad del argumento, sino una condición de honestidad intelectual: se avanza delimitando objetos todavía inestables, dispuestos a corregir el rumbo según lo que la propia indagación —colectiva, acumulativa, dialógica— vaya revelando. Y es justamente en esa tesitura de objetos móviles y fronteras difusas donde la **política posicional**, que da nombre a este número, adquiere su mayor pertinencia: no como receta metodológica cerrada, sino como recordatorio

de que todo analista se sitúa, quiéralo o no, en algún lugar respecto de aquello que describe, y de que ese lugar —sus supuestos, sus afinidades, sus distancias— condiciona tanto lo que se ve como lo que se deja de ver, al tiempo que le exige hacer valer desde la reflexividad la calidad argumentativa de sus postulados.

Dicho lo anterior, permítase una selección deliberadamente focalizada —no exhaustiva— de esa agenda amplia de indagación, entendida como el tipo de trabajo que reclamaría a unas ciencias sociales dispuestas a situarse simultáneamente en la universidad, los centros de investigación, los sectores gubernamentales y privados, y la escena público-profesional en sentido amplio. Cada espacio exige un énfasis distinto: a la universidad corresponde la innovación conceptual y la formación de largo aliento, poco compatible con la urgencia del ciclo noticioso o las presiones político-gubernamentales; a los centros de investigación, la traducción interdisciplinar hacia problemas aplicados y verificables; a los sectores gubernamentales y privados, la tensión —nunca resuelta del todo— entre la función regulatoria del primero y la lógica de captura, junto a su impulso hacia la aplicabilidad socio-empresarial, que puede primar en el segundo; y a la escena público-profesional, la tarea de traducir esa reflexión en términos accesibles u orientadores para una ciudadanía que, en última instancia, sufre o disfruta sus consecuencias. Un escenario, entre muchos, que convoca a las cuatro instancias por igual es el de una sociedad crecientemente moldeada por la digitalización y por tecnologías cognitivas y poshumanizantes —inteligencia artificial generativa, interfaces neuronales, arquitecturas algorítmicas de decisión, y más— orientadas a impactar, de manera simultánea y acelerada, la economía, el medio ambiente, la salud, la educación, la gobernanza, el ocio, la privacidad y la cotidianidad de los seres humanos, a escala planetaria.

En el terreno económico, urge indagar las nuevas configuraciones del trabajo, la propiedad y el valor que emergen de la automatización cognitiva y del capitalismo de plataformas: la concentración de renta en infraestructuras digitales que intermedian casi cualquier transacción social, la precarización de vastos sectores laborales sustituidos por sistemas algorítmicos, y la emergencia de formas de extracción de valor que algunos describen como tecnofeudalismo, relaciones de dependencia y renta que ya no obedecen a la lógica del mercado competitivo, sino a la arquitectura misma de la plataforma.

En el plano ambiental, resulta indispensable examinar la huella material —hídrica, energética, mineral— de la infraestructura computacional que sostiene la revolución cognitiva: los centros de datos, la extracción de tierras raras, el consumo energético creciente de los modelos de gran

escala, todo ello invisibilizado tras la retórica de la desmaterialización digital, cuando en realidad desplaza sus costos ecológicos hacia geografías y poblaciones ya vulnerabilizadas.

En el de la salud, se abre un campo de indagación en torno a la medicina algorítmica y la biovigilancia de poblaciones enteras mediante dispositivos de monitoreo continuo, junto a la promesa —tan seductora discursivamente como desigual en su distribución— de tecnologías de extensión de la vida y de mejora cognitiva, que amenazan con inaugurar nuevas jerarquías biológicas entre quienes accedan a ellas y quienes queden excluidos.

En el campo educativo, corresponde a las ciencias sociales examinar con particular cuidado los procesos de personalización algorítmica del aprendizaje y la creciente delegación de funciones pedagógicas en sistemas de tutoría cognitiva, cuyo riesgo no menor —y en buena medida ya visible— es el de erosionar o incluso banalizar, precisamente en la etapa formativa, las capacidades de pensamiento autónomo, deliberación argumentada y juicio crítico que la propia democracia liberal requiere para sostenerse en el tiempo.

En el de la gobernanza, se vuelve urgente estudiar el avance de la decisión automatizada y predictiva en ámbitos tan sensibles como la seguridad pública, la asignación de recursos estatales o la identificación biométrica de la ciudadanía, procesos que tienden a sustituir la deliberación pública por la optimización técnica, e incluso socavar las libertades de las personas, desplazando instituciones representativas y deliberativas que forman el núcleo del ordenamiento democrático-liberal tal como lo entendieron Bobbio, Dahl o Sartori.

Y en el del ocio y la cotidianidad ampliamente entendida, reclama poner un foco de interés la llamada economía de la atención: arquitecturas de diseño adictivo, curaduría algorítmica del deseo y de la opinión pública, y una atomización creciente de la vida social que, bajo la apariencia de una conectividad sin precedentes, erosiona los vínculos comunitarios y los espacios de encuentro cívico presencial, sustituyéndolos por formas de sociabilidad mediadas y, con frecuencia, mercantilizadas, al tiempo que se impone un espectro panóptico, desplegable en una trama de tentáculos e intromisiones, que reduce casi a la nada los espacios y ejercicios de la privacidad entre los individuos.

Conviene subrayar que estos seis registros —económico, ambiental, sanitario, educativo, gubernativo y de la vida cotidiana—, aunque no son los únicos, no constituyen compartimentos estancos ni una simple lista de casillas por completar, sino un sistema de relaciones que se refuerzan

entre sí y exige ser leído en su conjunto. La precarización laboral, por ejemplo, alimenta la vulnerabilidad sanitaria y educativa de los sectores afectados; la huella ambiental de la infraestructura computacional condiciona las opciones de gobernanza energética disponibles para los Estados, cuando ésta debiera afianzarse e impulsarse más proactivamente en aras de un alineamiento favorable del sector ciudadano y el interés público; y la erosión del juicio crítico en la etapa formativa repercute en la capacidad ciudadana de deliberar sobre los propios dispositivos de gobernanza algorítmica que la afectan. Se hace mención de estos entrelazamientos con la conciencia de que el panorama es aún más amplio y denso. Ninguna disciplina aislada puede abarcar por sí sola esa densidad de relaciones cruzadas, lo que reafirma la pertinencia de un abordaje transdisciplinar.

Ninguno de estos seis registros, además, se presenta en América Latina con la misma fisonomía que en los polos donde se diseñan y financian estas tecnologías. La región enfrenta el fenómeno desde una posición de dependencia estructural respecto de infraestructuras digitales gobernadas casi por completo fuera de sus fronteras; con capacidades regulatorias más débiles frente a actores corporativos transnacionales; y con brechas digitales previas que la nueva ola de automatización cognitiva corre el riesgo de profundizar, o ya lo estaría haciendo. Que Alternativas en Ciencias Sociales, editada desde Cajamarca y con vocación de proyección latinoamericana, incorpore esta agenda no es, por ello, un gesto de mimesis, sino una forma de insistir en que estos procesos también deben ser pensados, y en la medida de lo posible disputados, desde las condiciones concretas —no siempre favorables— en que la región los recibe.

Nada de lo descrito, en cualquier caso, avanza de manera neutral, espontánea o meramente tecnológica, como si respondiera solo a una inercia impersonal del progreso. Buena parte de la literatura especializada en la materia —desde la crítica al capitalismo de vigilancia hasta los análisis más recientes sobre gobernanza algorítmica y concentración del poder tecnológico, incluyendo, como cuestionamiento, un impulso en pro de los neuroderechos y la protección de la autonomía neuronal de las personas— coincide en señalar que esta transformación civilizatoria responde, en no poca medida, a un modelo político-estratégico impulsado por una élite corporativa-gubernamental que actúa de manera restrictiva y hegemónica, y que resulta, en sus consecuencias más visibles, francamente adversa —cuando no abiertamente enemiga— de los principios democrático-liberales que han sostenido, con todas sus imperfecciones históricas, buena parte del ordenamiento político moderno: la separación de poderes, la rendición de cuentas ante la ciudadanía, la

deliberación pública informada, el pluralismo en el ecosistema informativo y la protección de las libertades individuales frente a todo poder desmedidamente concentrado, sea este de origen estatal o privado.

Ante ese diagnóstico, la tarea de unas ciencias sociales prospectivamente dimensionadas no puede reducirse a la descripción neutral de tendencias, ni derivar hacia el panfleto denunciativo que sacrifica el rigor en aras de la indignación. Exige, en cambio, asumir una vigilancia crítica e informada sobre el modo concreto en que estas tecnologías se diseñan, se financian y se despliegan, y sobre los intereses —no siempre explícitos, casi nunca sometidos a escrutinio público suficiente— que orientan ese despliegue. Se trata, en el fondo, de una tarea posicional en el sentido más estricto: reconocer desde dónde se mira este proceso, con qué herramientas conceptuales y con qué grado de proximidad respecto de sus promotores, antes de pronunciarse sobre su sentido último; al mismo tiempo que identifica —y se suma a— la elevación cuestionadora de voces ciudadanas, profesionales y políticas diversas que se pronuncian por un entorno alternativo, tan viable como deseable, con miras a apuntalar órdenes y sentidos culturales habitables, en concordancia con nuestra humanidad y expresión política.

De manera que, frente a un horizonte tan vasto como incierto, cabe preguntarse, finalmente, qué sentido, alcance e impacto pueden tener apuestas intelectuales y culturales como la que representa esta revista. La respuesta, con la modestia que corresponde a una publicación como ACS, no puede ser otra que la de asumirse como un espacio de alerta temprana, de estímulo al pensamiento propio y de reexamen constante de dinámicas que, de otro modo, tienden a naturalizarse antes de ser nombradas con precisión. No pretendemos ofrecer respuestas categóricas ni programas de acción ya resueltos frente a procesos de esta magnitud; aspiramos, en cambio, a sugerir vías alternativas, constructivas y dignificadoras, capaces de acompañar —sin ingenuidad, pero también sin resignación— el tránsito hacia lo que viene. Entre la euforia tecno-optimista que todo lo celebra sin matices y el catastrofismo que todo lo condena de antemano, cabe todavía un lugar —incómodo, exigente, pero necesario— para el pensamiento crítico que examina, distingue y pondera antes de pronunciarse; ese lugar es precisamente el que esta revista aspira a ocupar.

Ese propósito no es ajeno, por lo demás, a las decisiones editoriales más concretas que ha ido tomando esta revista desde su fundación en 2024: la opción por el acceso abierto; la insistencia en el rigor formal y en la revisión por pares como condición de credibilidad frente a un ecosistema informativo saturado de afirmaciones sin sustento; y la disposición a dar cabida, dentro de un mismo número, a registros tan distintos como el

histórico-cultural, el económico-financiero, el de la economía solidaria y el ensayístico-filosófico, en la convicción de que ninguno de ellos agota por sí solo la comprensión de un presente tan hipercomplejo. Sostener esas decisiones, número tras número, es ya una forma modesta de practicar aquello que estas páginas reclaman en abstracto: una ciencia social atenta, rigurosa y comprometida con su tiempo, sin renunciar a la distancia crítica que la disciplina exige. Como responde ante una búsqueda de caracterización de nuestra época, Julián Casanova:

Hoy está fallando el pensamiento analítico. No hay historia sin lectura crítica, esta te lleva a la diversidad, la pluralidad, a cambiar tus ideas cuando viene algo que es mejor. La mente analítica requiere escuchar, contrastar, cambiar si hace falta tus argumentos... El conocimiento crítico es un privilegio independiente de las ideas políticas. (en González, 2026)

Por ello, esas vías no buscan anularnos como personas ni como ciudadanos ante la escala y la velocidad de estos procesos, sino mantenernos atentos, lúcidos y, en el mejor de los casos, reconciliados con esa condición dignificadora, compartida y autónoma que nos es inherente por formar parte de este mundo y esta época. Se trata de una apuesta por preservar la agencia reflexiva de las personas y sus colectividades frente a arquitecturas de poder que, cuando avanzan sin contrapeso, tienden a prescindir de ella, tratándonos como variables a optimizar antes que como sujetos con capacidad de deliberar y de disentir.

Referencias bibliográficas

- Altare, G. (2017). Agnes Heller: El islamismo radical es peor que una dictadura. *El País Semanal*. https://elpais.com/elpais/2017/08/21/eps/1503266716_150326.html
- Da Empoli, G. (2025). *La hora de los depredadores*. Seix Barral.
- Escalante, F. (2024). *La mirada de Dios*. El Regreso del Bisonte.
- Kaplan, R.D. (2025). *Tierra baldía. Un mundo en crisis permanente*. RBA.
- González H., B. (2026). Julián Casanova, historiador: “Antes pensábamos que la verdad nunca era absoluta y había un elogio del conocimiento. Ahora hay un desprecio del conocimiento”. *Primicias*. <https://www.primicias.ec/internacional/julian-casanova-historiador-extremismos-conocimiento-131209/>